



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



Sindicatura
Municipal

Oficio de sindicatura: 0145/2025.

Asunto: se solicita inclusión de tema dentro
del orden del día de sesión de Ayuntamiento.

San Luis de la Paz, Guanajuato, a 21 de febrero de 2025.

*"15 de febrero. Día Internacional del cáncer infantil 2025:
inspirando la acción" "Actúa hoy".*

Licdo. José Francisco Mendoza Martínez.

Secretario del Ayuntamiento.

Administración Municipal de San Luis de la Paz, Gto.

Presente.



La que suscribe, Licenciada Leticia González Muñoz, Síndica propietaria del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, con el debido respeto comparezco a efecto de lo siguiente:

De conformidad con lo señalado por el artículo 51 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, a través del presente se solicita el que dentro del orden del día de la siguiente sesión de Ayuntamiento que corresponda se agende el siguiente tema:

✓ Dictamen emitido por los miembros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, mismo que tiene relación con asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 964/2023 promovido por la C. Matilde Tejeda Arredondo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato.

El acto reclamado en el citado juicio es la omisión de poner en marcha y funcionamiento el descargue sanitario del drenaje y conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, a fin de prevenir, evitar y solucionar la contaminación ambiental generada por las descargas sanitarias, y en el cual existe sentencia de fecha 31 de octubre de 2023, en la cual se estableció que las autoridades responsables deberán:

a. Otorgar el auxilio para la recepción de las aguas residuales del domicilio de la parte quejosa, como lo es el desazolve de la fosa séptica que en su caso tuviera instalada, acción que deberá realizarse de manera periódica.



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



Sindicatura
Municipal

Así como establecer un control adecuado sobre la red de drenaje que se encuentra construida en la comunidad para que no se realice la descarga de aguas residuales en el sistema.

b. Se convoque a una mesa técnica en la cual se discuta cuáles son las opciones más viables que se tienen para poder brindar una solución a la problemática, derivada de la inexistencia de un cuerpo receptor en el que se descarguen las aguas de la planta de tratamiento.

c. Se defina e implemente una solución para atender el problema hasta que se encuentre en operatividad la red de drenaje sanitario, a efecto de evitar que los fluidos salgan al exterior.

Siendo que el último acuerdo que obra dentro del expediente es de fecha 11 de febrero de 2025, mismo por el cual se requiere a las autoridades responsables Ayuntamiento y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado para que informen las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual, en sesión de la comisión de agua potable y alcantarillado de fecha 20 de febrero de 2025 se presentan propuestas para atender el cumplimiento de la sentencia dictada.

Lo anterior con la finalidad de que dicho dictamen sea considerado para su análisis y dictaminación por el Ayuntamiento.

Además de lo ya citado, la presente petición encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 27 fracciones I, y VI, 133 y 137 fracción VI de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, en relación con los artículos 23 fracción VII, X, y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas, quedando como su atenta y segura servidora.

Atentamente.

San Luis de la Paz, Guanajuato.

Lic. Leticia González Muñoz.

Síndica del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato.



Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Período de Gobierno 2024 – 2027.

Presente.

Quienes suscribimos, miembros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento Constitucional de San Luis de la Paz, Guanajuato, para el periodo de gobierno 2024 – 2027 dos mil veinticuatro dos mil veintisiete, con fundamento en lo establecido por los artículos 75 setenta y cinco, 76 setenta y seis, 77 setenta y siete, 83 ochenta y tres fracción VIII, y 93 noventa y tres de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y artículos 51, 52, 99 fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Gto., nos permitimos presentar a consideración del Pleno el dictamen que contiene asuntos de interés municipal.

ANTECEDENTES.

En fecha 10 diez de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, en Sesión Solemne se instaló formal y legalmente el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato para el período de gobierno 2024 – 2027 dos mil veinticuatro– dos mil veintisiete, con la totalidad de sus integrantes, tomando la protesta conforme a lo dispuesto por los artículos 31 treinta y uno, 34 treinta y cuatro, y 36 treinta y seis de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, así como en los numerales 11 once y 12 doce del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Gto.

Por su parte, el día 10 diez de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato para el período de gobierno 2024 – 2027 dos veinticuatro – dos mil veintisiete, asentada en el acta número 01/2024, se aprobó la integración de los miembros que trabajarían en el primer año de ejercicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, quedando conformada por la Lic. Leticia González Muñoz, con el carácter de Presidenta; Regidor Alejandro García Martínez, en su carácter de Secretario; así como por los Regidores Joel Hernández Torres, Brenda Guadalupe Méndez Camacho, y Erika Karina Galván Guerrero, en su carácter de Comisionados.

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

CONSIDERANDOS.

Que, para estudiar, examinar y proponer alternativas de solución a asuntos de las distintas ramas de la administración municipal, y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se organizará el órgano colegiado en Comisiones, según lo dispuesto por el artículo 84 ochenta y cuatro del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Gto.

Que las Comisiones se integrarán de manera colegiada, por el número de miembros que establezca el Reglamento Interior o el acuerdo de Ayuntamiento, procurando que reflejen pluralidad y proporcionalidad; en cada comisión habrá un Presidente y un Secretario, asimismo, el Ayuntamiento podrá acordar la designación de Comisionados para la atención de los asuntos de la competencia municipal.

Que las Comisiones deberá ser plurales, proporcionales y garantizando la paridad de género en la integración, según lo dispone el artículo 78 setenta y ocho de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

Que las Comisiones deben someter a la consideración del Ayuntamiento, los asuntos relativos a su competencia, mediante dictámenes o propuestas que se presentarán al Pleno, para su conocimiento o aprobación, según corresponda.

Que el dictamen o propuesta deberá concluir con proposiciones claras y concretas que puedan someterse a votación, según lo dispone el artículo el artículo 105 ciento cinco del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Gto.

RESULTANDO.

Que fue turnado a ésta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, para su estudio y análisis diversos asuntos de competencia de esta comisión.

De esta manera, siendo las 13:09 trece horas con nueve minutos del día 20 veinte de febrero de 2025 dos mil veinticinco, los miembros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se reunieron en el salón de Regidores del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, desarrollándose la sesión de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: Lista de presentes.

En atención a lo dispuesto por el artículo 93 noventa y tres del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Gto., se realiza el pase de lista de asistentes, encontrándose presentes los siguientes miembros del Ayuntamiento:

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

- I. Síndico, Licda. Leticia González Muñoz.
- II. Regidor Alejandro García Martínez.
- III. Regidor Joel Hernández Torres.
- IV. Regidora Brenda Guadalupe Méndez Camacho.
- V. Regidora Erika Karina Galván Guerrero.

Por otra parte, atendiendo a lo señalado por el artículo 101 ciento uno del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, en la presente sesión de Comisión se autoriza la presencia de los siguientes funcionarios municipales:

- Ing. José Roberto Regalado Arreola. Director General de JAPASP.
- Licda. Yareth Manríquez Villanueva. Subdirectora General de JAPASP.
- Licda. Ma. Elizabeth Vázquez Ramírez. Encargada del Departamento Jurídico.
- Arq. José Alvarado Briones. Director General de Infraestructura Municipal y Obras.
- Licdo. José Alejandro Suárez Suárez. Personal Jurídico de JAPASP.

SEGUNDO PUNTO: Declaratoria del quórum.

Una vez hecho el pase de lista, en virtud de que se encuentra presente la totalidad de los miembros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, tal como lo señala el artículo 93 noventa y tres del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Gto., se declara que hay quórum legal para llevar a cabo la presente sesión.

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día.

En este punto se concede el uso de la voz a los miembros de la Comisión para que en caso de así desearlo puedan agendar temas a tratarse dentro de los asuntos de interés general, lo cual no sucede.

Una vez analizado el orden del día de la presente sesión, éste se aprueba por unanimidad de los presentes, para quedar de la siguiente manera:

1. Lista de presentes.
2. Declaratoria de quórum.
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

4. Asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 964/2023 promovido por la C. Matilde Tejeda Arredondo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato.
5. Asuntos de interés general.
6. Clausura.

CUARTO PUNTO: Asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 964/2023 promovido por la C. Matilde Tejeda Arredondo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato.

La Presidenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado refiere que el acto reclamado en el citado juicio es la omisión de poner en marcha y funcionamiento el descargue sanitario del drenaje y conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, a fin de prevenir, evitar y solucionar la contaminación ambiental generada por las descargas sanitarias, y en el cual existe sentencia de fecha 31 de octubre de 2023, en la cual se estableció que las autoridades responsables deberán:

a. Otorgar el auxilio para la recepción de las aguas residuales del domicilio de la parte quejosa, como lo es el desazolve de la fosa séptica que en su caso tuviera instalada, acción que deberá realizarse de manera periódica.

Así como establecer un control adecuado sobre la red de drenaje que se encuentra construida en la comunidad para que no se realice la descarga de aguas residuales en el sistema.

b. Se convoque a una mesa técnica en la cual se discuta cuáles son las opciones más viables que se tienen para poder brindar una solución a la problemática, derivada de la inexistencia de un cuerpo receptor en el que se descarguen las aguas de la planta de tratamiento.

c. Se defina e implemente una solución para atender el problema hasta que se encuentre en operatividad la red de drenaje sanitario, a efecto de evitar que los fluidos salgan al exterior.

Siendo el último acuerdo que obra dentro del expediente es de fecha 11 de febrero de 2025, mismo por el cual se requiere a las autoridades responsables Ayuntamiento y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado para que informen las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

En este sentido, en su momento se plantearon la existencia de dos opciones:

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

- a. La construcción de la laguna de oxidación (con la limitante de no contar con un predio para tales fines), o
- b. Hacer el rebombeo de las aguas residuales de la comunidad de El Maravillal, a la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad de San Nicolás del Carmen de este Municipio.

Con la finalidad de buscar cumplir con la sentencia de amparo, se informa que se han realizado diversas reuniones entre el personal de la Sindicatura, del Departamento Jurídico, de la JAPASP, así como de la Dirección de Infraestructura Municipal y Obras, para lo cual se llevó a cabo una visita de verificación a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad de El Maravillal, de la cual se pudo constatar que la obra civil funciona, sin embargo, los equipos existentes son obsoletos, siendo que los costos de su reactivación son altísimos, esto aunado a que no se tiene un predio donde realizar las descargas, así como tampoco existe un interesado en utilizar las aguas generadas, por lo que no es viable esta opción.

Dado que la planta del Maravillal está inoperable, la opción más oportuna para solventar el tema es que ésta solo se utilice como cárcamo, y a partir de ahí se lleve a cabo el rebombeo de las aguas a la planta de San Nicolás del Carmen, esto en un tramo de alrededor de 1,760.00 metros.

En este sentido, por parte de la JAPASP se trabajó en el desarrollo de un anteproyecto para el establecimiento de equipamiento de un cárcamo de rebombeo que permita elevar las aguas residuales a un punto con una cota superior, para posteriormente ser conducidas hacia otro sistema de conducción que las llevará hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de la Comunidad de San Nicolás del Carmen. De esta manera, se garantizará un adecuado manejo y tratamiento de las aguas residuales de la comunidad de El Maravillal.

La obra comprende las siguientes actividades:

- Se equipará el cárcamo de rebombeo de concreto armado, con un sistema de bombeo que permita la elevación de las aguas residuales a una cota superior.
- Se instalará una línea de conducción que transportará las aguas residuales desde el cárcamo de rebombeo hasta el punto de conexión con el sistema existente, el cual llevará las aguas hacia la planta de tratamiento de aguas residuales.
- Se implementará un sistema de control automático para el funcionamiento del cárcamo de rebombeo.

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

- Se realizarán obras complementarias para las instalaciones de bombeo, así como las estructuras de acceso y mantenimiento al cárcamo y a la línea de conducción de aguas residuales.

El costo de las obras proyectadas por la JAPASP asciende a un monto de \$2,278,946.33 dos millones doscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 33/100 M.N.

Dado el costo económico, se deberá buscar colaboración del Estado vía la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, o en su defecto trabajarlo conjuntamente entre Municipio y JAPASP a través del desarrollo de diversas etapas.

La intención de la presente reunión es la con la finalidad de que vía la generación de un dictamen de esta Comisión, se dé cuenta al Ayuntamiento de la situación del juicio de amparo 964/2023, así como en el Pleno del Cabildo se tomen decisiones trascendentales para la continuidad del proyecto desarrollado por parte del organismo operador del agua, tal como lo es la asignación de recursos para su continuidad, y que a su vez se tenga a las autoridades responsables: Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz, por demostrando su compromiso mediante la realización de acciones llevadas a cabo para atender la resolución emanada dentro del presente proceso.

Asimismo, por parte de la JAPASP se ha estado otorgando el servicio de desazolve de la fosa séptica en el domicilio de la quejosa, actividad que se desarrolla de manera periódica de acuerdo con la capacidad y funcionamiento de dicha fosa.

En todo caso, esta reunión así como las actividades previas sirven a la suscrita para que como representante legal del Ayuntamiento se pueda informar al Juzgado de Distrito, máxime que en el acuerdo del pasado 11 de febrero existen prevenciones y términos al respecto, mismos que incluyeron el apercibimiento de imposición de multa, así como el inicio del trámite de inejecución de sentencia que puede concluir con la separación del cargo y consignación ante las autoridades correspondientes.

Expuesto el tema, y desahogadas las dudas, se procede a la emisión de los siguientes puntos de acuerdo:

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

Puntos de acuerdo:

Esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado acuerda por unanimidad de los presentes el proponer al Ayuntamiento lo siguiente:

Primero. Que se dé cuenta al Ayuntamiento de la situación del juicio de amparo 964/2023 que se lleva ante el Juzgado Primero de Distrito.

Segundo. Atendiendo a que las obras proyectadas por la JAPASP ascienden a un monto de \$2,278,946.33 dos millones doscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 33/100 M.N., se somete a consideración del Ayuntamiento que a la brevedad se hagan las gestiones y proyecciones necesarias para que de manera conjunta con el organismo operador del agua en el municipio por sus siglas JAPASP, se busque la asignación de los recursos necesarios que permitan garantizar un adecuado manejo y tratamiento de las aguas residuales de la comunidad de El Maravillal, y que con ello se dé el cumplimiento de la ejecutoria emanada del juicio de amparo 964/2023.

Tercero. Se propone al Ayuntamiento el que por su conducto se inste a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz para que igualmente haga las gestiones suficientes ante el Gobierno del Estado de Guanajuato, la Secretaría del Agua y del Medio Ambiente, o cualquier instancia o dependencia que pueda participar en este proyecto mediante la asignación de recursos económicos.

QUINTO PUNTO. Asuntos de interés general.

No se agendaron asuntos generales en la presente sesión de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

SEXTO PUNTO: Clausura.

Siendo las 14:02 catorce horas con dos minutos del día 20 veinte de febrero de 2025 de dos mil veinticinco, y no habiendo algún otro asunto por tratar, se clausura esta reunión de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Así lo dictaminó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, acordando por unanimidad, turnar el presente dictamen, para que sea incluido en el orden del

Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

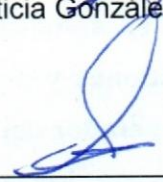
Sesión de Comisión de fecha 20 de febrero de 2025.

día de la siguiente Sesión del Ayuntamiento Municipal, a efecto de que sea analizado, discutido y acordado por el Pleno del Ayuntamiento.

Firman el presente dictamen en la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato, a los 20 veinte días del mes de febrero de 2025 dos mil veinticinco.




Licda. Leticia González Muñoz.




Regidor Alejandro García Martínez.



Regidor Joel Hernández Torres.



Regidora Brenda Guadalupe Méndez Camacho.



Regidora Erika Karina Galván Guerrero.



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

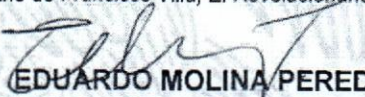
*"Inconformes con el ataque a la independencia judicial,
seguimos trabajando en defensa de los derechos humanos"*

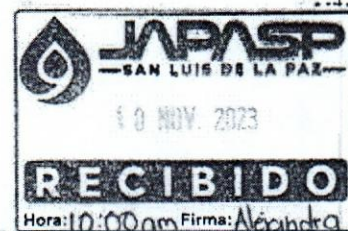
SECCIÓN DE AMPARO
JUICIO DE AMPARO 964/2023-III

| OFICIO. | AUTORIDAD RESPONSABLE. |
|---------|---|
| 19513 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO. |
| 19514 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO. |

Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales del caso, con el presente remito a usted, **copia certificada de la sentencia** pronunciada el día de hoy, en el juicio de amparo **946/2023-III**, promovido por Matilde Tejeda Arredondo.

ATENTAMENTE
GUANAJUATO, GUANAJUATO, 31 DE OCTUBRE DE 2023
"2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"


EDUARDO MOLINA PEREDA
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.





DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

Guanajuato, Guanajuato, a las **doce horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (foja 253)**, **Luis Alfredo Gómez Canchola**, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido de **Eduardo Molina Pereda**, secretario que autoriza y da fe, inicia la audiencia constitucional señalada en el juicio de amparo **964/2023-III**, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes.

Relación de constancias. El secretario hace relación de las constancias procesales y da cuenta con:

| No. | Constancias | Fojas |
|-----|---|-----------|
| 1 | Demanda de amparo promovida por Matilde Tejeda Arredondo. | 2 a 64 |
| 2 | Acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, que admitió parcialmente la demanda de amparo. | 140 a 152 |
| 3 | Informe justificado rendido por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, por medio de su apoderada. | 161 a 166 |
| 4 | Informe justificado rendido por el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, por conducto de su Síndica. | 230 a 233 |

A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar; y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables.

En el periodo de pruebas. Con fundamento en el numeral 123 de la Ley de Amparo, el Juez declara abierto el periodo de pruebas, en el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del mismo ordenamiento legal, se tienen por admitidas y desahogadas atento a su especial naturaleza, las documentales que obran en autos.

En el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones; por lo que, se da por terminado este periodo.

Finalmente, teniéndose por concluidas las anteriores etapas de la presente audiencia, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Conste.

SENTENCIA

VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 964/2023-V.

RESULTANDO

PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito depositado el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, Matilde Tejeda Arredondo promovió demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:

Autoridades responsables:

1. Ayuntamiento del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
2. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Actos reclamados:

"[...]"

5.1. *La omisión que subsiste hasta el momento de planear, programar, presupuestar y ejecutar el proyecto "Modernización de alumbrado público a través de la adquisición de ópticas para el mejoramiento visual mediante el uso de tecnología eficiente, segunda etapa en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.", sin contar con la factibilidad económica y financiera del proyecto, comprometiendo recursos no solo por el término de la administración municipal de San Luis de la Paz 2021 - 2024, sino de las subsecuentes administraciones, afectando recursos para la prestación de servicios públicos y el ejercicio de la*



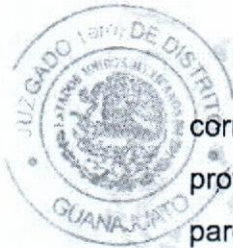
DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

función pública en detrimento de mi persona, de mi comunidad así como de los habitantes del Municipio, violentando el derecho a la buena administración pública.

5.2. La omisión que subsiste hasta el momento para la planeación, puesta en marcha y funcionamiento del descargue sanitario del drenaje y la conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, dando violación de dos rubros de derechos en perjuicio de mi persona así como de los habitantes de la comunidad: el derecho fundamental de acceso a los servicios de tratamiento y disposición de aguas residuales, relacionado con el derecho a la buena administración pública; así como el derecho humano a la salud en relación con los derechos humanos al agua y al medio ambiente sano.

5.3. La omisión que subsiste hasta el momento de prevenir, evitar y solucionar la contaminación ambiental generada por las inadecuadas descargas sanitarias del drenaje y la conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, afectando a mi persona así como de los habitantes de la comunidad [...] – sic-.



SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado, que en proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, la admitió parcialmente¹ bajo el expediente **964/2023-III**, únicamente por lo que hace a:

- La omisión de poner en marcha y funcionamiento el descargue sanitario del drenaje y conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, a fin de prevenir, evitar y solucionar la contaminación ambiental generada por las inadecuadas descargas sanitarias.

Asimismo, se requirió a las responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del

¹ La demanda se desechó respecto del diverso acto consistente en la licitación pública nacional presencial número ADQ/SLPAZ-01/2023, para la adquisición de 8,661 puntos de luz, del proyecto denominado "Modernización de alumbrado público a través de la adquisición de ópticas para el mejoramiento visual mediante el uso de tecnología eficiente, segunda etapa en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato".

En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja; el que se radicó bajo el expediente 335/2023, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, que en proveído de veintinueve de septiembre pasado, desechó por extemporáneo el medio de impugnación (foja 250); determinación que causó estado el once de octubre posterior (foja 254).

Ministerio Público de la Federación; y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 107, Constitucional; 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, y 107, todos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito; en virtud de que, la demanda se presentó en esta ciudad y se reclama una omisión que surte efectos positivos en donde este órgano de amparo ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se precisa que en la presente instancia constitucional se reclama:

- La omisión de poner en marcha y funcionamiento el descargue sanitario del drenaje y conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, a fin de prevenir, evitar y solucionar la contaminación ambiental generada por las inadecuadas descargas sanitarias.



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado (*folios 161 a 166; y 230 a 233*); sin embargo, dichas negativas deben desvirtuarse **en atención a las siguientes consideraciones.**

Como punto de partida, debe señalarse que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta; es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.

Es decir, el reclamo de actos omisivos conlleva el análisis sobre si las autoridades responsables tienen o no el deber de actuar en el sentido que lo propone la parte quejosa; lo que, por esa sola circunstancia indica que cualquier pronunciamiento que al respecto se realice desde este apartado (certeza de los actos) implicaría cometer el vicio argumentativo de petición de principio, que se traduce en prejuzgar sobre un aspecto que llevaría al estudio prematuro sobre la conculcación de derechos fundamentales alegada por la parte quejosa.

De modo que, para determinar la existencia de los actos consistentes en la omisión de una autoridad en ejercer alguna de las facultades que estima el amparista le corresponden, **es suficiente la coherencia o viabilidad del argumento relativo, en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la**

autoridad a la que se le atribuya la omisión, con el objeto de evitar que, en un pretendido análisis de la existencia de esas atribuciones, se propicie la denegación de justicia.

Es aplicable al caso, por las razones que contiene, la tesis aislada 1a. IV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, marzo de 2021, Tomo II, página 1215, con registro digital 2022760, que dispone:

"ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD.

Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares.

Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión.

Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos"

Sobre esa base, debe señalarse que los artículos 116, fracción VII, y 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos² establecen que las Entidades Federativas que

² "...Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[...]


VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior."

SENTENCIA

conforman la República Mexicana, adoptaran para su régimen interior el municipio libre, que tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos básicos, a saber, agua potable, **drenaje**, alcantarillado, calles, parques avenida, seguridad pública, limpieza de calles, entre otros.

En concordancia con lo anterior, el artículo 167, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios³ dispone que los ayuntamientos tendrán a su cargo, entre otros servicios públicos, los de Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales⁴.



De tal suerte que, ante la obligación constitucional de garantizar a los ciudadanos la prestación del servicio público de drenaje, tratamiento y disposición de las aguas residuales, es claro que debe tenerse por cierto el acto reprochado.

Mientras que, respecto de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz, también debe tenerse bajo esa calidad, en atención a que de conformidad con el numeral 12⁵ del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Municipio de San Luis de la Paz, es el organismo encargado de

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

³ "Servicios a cargo del ayuntamiento

Artículo 167. Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

[...]."

⁵ Artículo 12. La JAPASP es el Organismo encargado de operar y garantizar el adecuado funcionamiento de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, así como la captación, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales en el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato."

operar y garantizar el adecuado funcionamiento de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, así como la captación, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales en el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Máxime que, del acta 07/2023, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, se advierte que al abordarse la problemática relacionada con la condición sanitaria que enfrenta la comunidad; y en virtud de la necesidad de atender la parte técnica, se instruyó una mesa organizada por la secretaria particular, en la que deberían estar presentes, entre otras autoridades, la referida Junta de Agua Potable y Alcantarillado.

Por tanto, al margen de que si presta o no sus servicios en la comunidad de la que es parte la quejosa, incluso asumiendo que ello obedeciera a la inexistencia de una solicitud de adhesión a ese organismo, esa circunstancia no la exime de cumplir con una obligación constitucional a cargo del Estado, sobre todo, tomando en cuenta que se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal.

CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz, al rendir su informe justificado, planteó las siguientes causales de improcedencia *(se analizarán en diverso orden al propuesto)*:

FALTA DE INTERÉS

La responsable refirió que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no existe una afectación a la esfera jurídica de la quejosa, toda vez que, de su parte, no ha emitido acto alguno en su contra que pueda vulnerar sus derechos.



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

Debe desestimarse la causal hecha valer, porque ésta en realidad se hace depender de que, bajo la óptica de la autoridad, **no ha incurrido en omisión alguna en perjuicio de la quejosa (inexistencia del acto)**; aspecto que ya quedó desvirtuado en el considerando que antecede. De ahí que, si no se expuso argumento alguno que de manera frontal justifique las razones de la actualización de la causal, debe dejarse de emitir mayor pronunciamiento.

Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, registro digital: 174086, de rubro y texto:



"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio".

INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD

La autoridad sostiene que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues a su parecer, previo a instar la acción de amparo, la quejosa debió agotar el recurso de inconformidad previsto en el numeral 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Es **infundada** la causal de improcedencia propuesta.

A fin de explicar lo anterior, es conveniente traer a colación la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."

Como puede verse, la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción,



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación.

De considerar que las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos conforme a las leyes que los rijan, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades.

En ese sentido, para que se actualice esa hipótesis de improcedencia, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juzgador debe verificar **que no se actualice alguna de las excepciones** que el propio legislador previó en esa disposición, a saber:

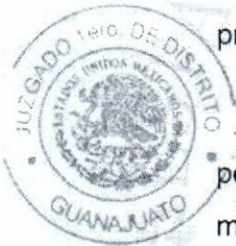
a) Que las leyes que rigen los medios ordinarios de defensa permitan la suspensión de los efectos del acto reclamado con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido.

b) Que el acto reclamado carezca de fundamentación.

c) Que en la demanda de amparo se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución.

d) Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

En el entendido que, basta con que se actualice alguna de esas hipótesis para que la quejosa deje de estar obligada a agotar los medios de impugnación ordinarios.



De esa forma, como lo indicó la promovente en su demanda de amparo, en el caso opera una excepción al principio de definitividad (sólo respecto del acto por el que se admitió la demanda), toda vez que al tratarse de una omisión, es evidente que, por sí sola, **carece de fundamentación alguna**; máxime que, en su contra sólo se plantearon violaciones directas a la Constitución Federal (*salud, medio ambiente y buena administración*); por ende, no le resultaba obligatorio observar el citado principio; de ahí que, la acción constitucional sea procedente.

Así, al no haber otra causal de improcedencia que se hiciera valer por las partes o que este órgano de amparo advierta de oficio, se procede al análisis del fondo de la cuestión efectivamente planteada.

QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación⁶ son esencialmente **fundados** y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada.

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

En su **primer motivo de disenso**, la quejosa aduce que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio el contenido del artículo 115, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 134 de la Constitución Federal, pues refiere que éstas tienen la obligación constitucional de prestar adecuadamente los servicios de tratamiento y disposición de aguas residuales, lo que según refiere, han incumplido, **lo que se traduce en una afectación a la buena administración pública, así como, a los derechos de salud y medio ambiente.**

De suerte que, afirma, las responsables tienen la obligación de crear condiciones de regularidad, funcionalidad, eficacia y eficiencia

⁶ No se analizarán los conceptos dirigidos a cuestionar la **licitación pública nacional presencial número ADQ/SLPAZ-01/2023** (identificados en el segundo motivo de disenso), pues como se destacó en líneas previas, **sobre ese acto se desechó la demanda de amparo.**



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

en el tratamiento y disposición de las redes de drenaje sanitario, pues hacerlo de manear inapropiada pone en riesgo la salud de las personas.

Luego, en su **tercer concepto de violación**, aduce, de manera medular, que las autoridades tienen la obligación de prestar adecuada y eficazmente los servicios públicos de drenaje sanitario, tratamiento y disposición de aguas residuales; pues al no hacerlo impiden que se garantice la protección a la salud y a un medio ambiente sano.

RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS

Como se adelantó, los motivos de inconformidad propuestos por la parte quejosa, analizados en su conjunto en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, por la estrecha relación que guardan entre sí, son **fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado**.

Con la finalidad de facilitar el estudio del presente asunto, en un primer apartado se retomará la doctrina jurisprudencial acerca del derecho humano a un medio ambiente sano y su vinculación con otras prerrogativas; luego, se establecerá brevemente el régimen jurídico que regula la prestación del servicio público de tratamiento de aguas residuales; y, finalmente, se evidenciará cómo es que las omisiones en que incurrieron las autoridades responsables vulneraron los derechos humanos invocados por la quejosa en su demanda de amparo.

I. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ACERCA DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

Al resolver el amparo en revisión 307/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que el derecho a

vivir en un medio ambiente sano ha sido reconocido en múltiples constituciones e instrumentos internacionales como un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla.

El reconocimiento de tal derecho obliga a entender que el hombre convive y forma parte de los ecosistemas que la propia naturaleza conforma, de suerte que a partir de ellos y de sus procesos biofísicos, obtiene diversos beneficios; sin embargo, en muchas ocasiones esta interacción entre el ser humano y los ecosistemas pone en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente.

Así, el ámbito de tutela de este derecho humano busca regular las actividades humanas para proteger a la naturaleza, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos inmediatos de los seres humanos; con otras palabras, este derecho no sólo atiende al derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y digno, sino también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma.

El derecho humano al medio ambiente como uno de los denominados "derechos de tercera generación" se fundamenta en la idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades; incluso, en este contexto, la idea de obligación prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales.

La Primera Sala también hizo alusión a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, conlleva que múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconozcan el derecho al



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

medio ambiente como un derecho en sí mismo, como el sistema interamericano, donde se ha generado una evolución hacia el reconocimiento de la naturaleza como un valor tutelable en sí mismo, del que deriva una serie de obligaciones ambientales para los Estados.

De esta manera, el derecho humano al medio ambiente posee una doble dimensión: una primera que puede denominarse objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano; y otra subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona.



En relación con el orden jurídico nacional, la referida Sala señaló que el artículo 4° Constitucional prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, en el cual se reconoce una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, caracterizada por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, la cual exige la tutela más amplia de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Federal.

De manera que el bien jurídico protegido por el derecho humano al medio ambiente en términos de nuestro texto constitucional es precisamente el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad.

Ello implica que en términos del artículo 4°, en relación con el diverso 1° Constitucional, el Estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano

o, lo que es lo mismo, a velar por una protección autónoma del medioambiente que no esté sujeta a la vulneración de otros derechos, ya que el objetivo de este ámbito de tutela se centra en evitar el daño ecológico como consecuencia mediata o inmediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos y colectivos cuya reparación pertenece, como última ratio, a la sociedad en general.

Por otro lado, advirtió que el derecho humano al medio ambiente sano también se traduce en un principio rector de política pública pues el artículo 4º constitucional establece: "El Estado garantizará el respeto a este derecho", en este sentido e interpretado en concordancia con el artículo 25 constitucional en relación con el desarrollo sustentable, resulta que estamos ante un principio constitucional de política pública.

En concordancia con lo anterior, el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Congreso de la Unión tendrá facultad para expedir leyes que *"establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico"*.

Por lo que la regulación en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, es una materia concurrente en la que participan los tres niveles de gobierno, tal como quedó establecido en las jurisprudencias P./J. 36/2011 (9a.) y P./J. 15/2012 (9a.), de rubros: **"PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL"**⁷;

⁷ Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I. Octubre de 2011. Tomo 1. Página: 297. Décima Época.



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

y, **"PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES TIENEN FACULTADES CONCURRENTES EN ESTA MATERIA, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL QUE EXPIDA EL ÓRGANO LEGISLATIVO FEDERAL"**⁸

Bajo esa misma línea, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 641/2017, sostuvo, en lo que se destaca, lo siguiente:

- Las fuentes convencionales en la materia ambiental, permiten colegir que los Estados "tienen la obligación de proteger [a las personas] contra los daños ambientales que interfieran en el disfrute de los derechos humanos"⁹. Así, los Estados están obligados a: (I) adoptar *"y aplicar marcos jurídicos para proteger contra daños ambientales"* que puedan vulnerar los derechos humanos, y (II) *"regular a los agentes privados" para proteger contra esos daños*¹⁰.

- Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio en que habita y elevar su nivel de vida, dependen en gran medida de la disponibilidad de agua, existiendo una correlación esencial entre la calidad del agua, derecho a un medio ambiente sano y salud pública.

- La prevención y control de la contaminación del agua, "es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país"¹¹. En ese sentido, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del agua, de manera que sean compatibles la

⁸ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X. Julio de 2012. Tomo 1. Página: 346. Décima Época.

⁹ ONU. Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. 30 de diciembre de dos mil trece. Párrafo 44.

¹⁰ *Ibidem*. Página 46.

¹¹ Artículo 117 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.



obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas, así como la prevención y el control de la contaminación de tal recurso natural, son una meta prioritaria del Estado, en tanto resultan indispensables para que las personas puedan alcanzar un nivel de vida adecuado y digno.

- Así, para frenar eficazmente la contaminación del agua, "deben aplicarse reglamentos en todos los sectores y todo el país"¹², dando prioridad a la eliminación de los problemas más urgentes y graves. En tal sentido, no puede soslayarse que la salubridad del agua es un componente central de los derechos humanos, y por ende, uno de los problemas ecológicos que requieren más atención por parte del Estado, es precisamente, la debida regulación, monitoreo y tratamiento de las "aguas residuales".

- Las aguas residuales pueden definirse como una combinación de fluidos efluentes domésticos compuestos por aguas negras -que contienen materia fecal-, aguas grises procedentes de cocinas y baños-; aguas procedentes de establecimientos comerciales e instituciones, incluidos hospitales; efluentes industriales, agua de lluvia y otras escorrentías urbanas; y efluentes agrícolas, hortícolas y acuícolas, con materia disuelta o en suspensión. Debe entenderse que las aguas residuales no sólo incluyen las aguas cloacales, sino también los lodos fecales y residuos sépticos procedentes de letrinas de pozo y tanques sépticos.

- Los problemas derivados de la contaminación exigen que se hagan esfuerzos concertados "para lograr la gestión sostenible de las aguas residuales y luchar contra la contaminación sobre la base de los derechos humanos". El hecho de que no se gestionen las

¹² ONU. Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. 30 de diciembre de dos mil trece. Párrafo 50.



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

aguas residuales de una persona afecta principalmente a los medios de vida y la salud de otras.

- Cuando no se gestionan las aguas residuales, "constituyen un peligro tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres humanos [...] ya que los daños a la integridad de los ecosistemas repercuten inevitablemente en la salud y el bienestar de las personas"¹³. Muchas de las llamadas enfermedades relacionadas con el agua, son en realidad enfermedades de origen fecal transmitidas por el contacto con agua contaminada con heces fecales o por su ingestión.

- La contaminación en gran escala en ocasiones tiene efectos directos y visibles, pero con mayor frecuencia "el impacto de una gestión inadecuada de las aguas residuales y de la contaminación de las aguas es invisible y sólo se hace patente a largo plazo"¹⁴. La gestión inadecuada de las aguas residuales limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y aumenta la pobreza, al incrementar los gastos de atención de la salud y reducir la productividad y las oportunidades educativas.

- Al respecto, la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento establecida por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en una reunión informativa celebrada en enero de dos mil trece, declaró que, para que los ciudadanos y los países "puedan disfrutar de los beneficios que reportan un saneamiento adecuado y el agua potable para la salud, el crecimiento económico y la dignidad humana [es] preciso adoptar un enfoque holístico, que incorpor[e] la recogida de aguas residuales y su tratamiento y reutilización".

¹³ ONU. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 5 de agosto de 2013. Párrafo 13.

¹⁴ Ibídem. Párrafo 16

- Debido a las implicaciones negativas que tiene la contaminación del agua ante el público, se han fijado objetivos que abarcan varios aspectos: (I) prevenir la contaminación; (II) "reducir los efectos de la contaminación mediante la recogida y el tratamiento"; y (III) reutilizar las aguas residuales.¹⁵ Desde la perspectiva de los derechos humanos, resulta fundamental integrar los intereses de los más desfavorecidos y los más afectados por la contaminación del agua.

- La gestión inadecuada de aguas residuales "puede poner en peligro el acceso de los usuarios que se encuentran corriente abajo al agua para beber o para regadío". La contaminación del agua a menudo "afecta mucho más a las comunidades más pobres que a otras, pues la falta de infraestructura las obliga a utilizar fuentes insalubres"¹⁶.

- La inversión en la gestión de las aguas residuales está estrechamente ligada a las opciones tecnológicas, empero, las necesidades de financiación no se limitan a la infraestructura, sino que "abarcan la gestión, la vigilancia, la formulación de políticas, la creación de capacidad, la sensibilización y la aplicación"¹⁷.

- En el entendido que prestar una mayor atención a la gestión de las aguas residuales desde una perspectiva de derechos humanos no implica, necesariamente, que todos deban estar conectados a instalaciones de tratamiento de aguas residuales, ni que de la noche a la mañana deba emprenderse la gestión adecuada de las aguas residuales.

- Con arreglo al marco de derechos humanos, las medidas y tecnologías que se adopten incluidas las soluciones de

¹⁵ Ibidem. Párrafo 83.

¹⁶ ONU. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 5 de agosto de 2013. Párrafo 37.

¹⁷ Ibidem. Párrafo 65

SENTENCIA

saneamiento, deben ser apropiadas para cada contexto dado y acorde a las obligaciones jurídicas que impongan las leyes internas, y esas medidas han de adoptarse gradualmente para avanzar por etapas.

- Empero, los Estados deben avanzar de la forma más ágil y eficaz posible para "garantizar el acceso a servicios de saneamiento seguros, asequibles y aceptables para todos, que proporcionen intimidad y preserven la dignidad". Esto requiere medidas "deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena realización"¹⁸, en particular con miras a crear un entorno propicio para que las personas ejerciten sus derechos relacionados con el saneamiento.



- Diversos organismos de derechos humanos han entendido, por tanto, que en términos amplios el saneamiento de las aguas "incluye el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos y las aguas residuales asociadas".¹⁹ El saneamiento "se puede definir como un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene"²⁰.

- Las obligaciones primordiales en materia de derechos humanos relacionadas con el saneamiento del agua "incumben al Estado, y éste debe garantizar que los agentes no estatales, incluidas las personas, no pongan en peligro el disfrute de los derechos humanos".²¹ El Estado "debe asumir una función crucial", y está obligado en virtud de la legislación sobre derechos humanos, a sensibilizar a la población sobre los beneficios del saneamiento.

- Los Estados cuentan con una obligación de "proteger" el derecho humano a un medio ambiente sano, lo cual exige no sólo

¹⁸ ONU. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 1 de julio de 2009. Párrafo 64.

¹⁹ ONU. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 5 de agosto de 2013. Párrafo 21.

²⁰ *Ibidem*. Párrafo 63.

²¹ *Ibidem*. Párrafo 68.

que se abstengan de realizar actos contaminantes, sino primordialmente, que tomen acciones positivas, concretas y deliberadas tendientes a tutelar tal derecho de manera eficaz y con miras a su plena realización.

- Dicho mandato, en tratándose de la protección ecológica de las aguas, implica que asuma las siguientes conductas: (I) proteger la prestación de servicios de agua y saneamiento; (II) proteger "los recursos o infraestructura necesarios contra la contaminación o la injerencia",²² y (III) proteger al ambiente y a los recursos hídricos contra las conductas indebidas de los actores no estatales.

II. RÉGIMEN JURÍDICO RELACIONADO CON EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Por otra parte y como se abordó previamente, los artículos 116, fracción VII, y 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos²³, establecen que las Entidades Federativas que conforman la República Mexicana, adoptaran para su régimen interior el municipio libre, que tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos básicos, a saber, agua potable,

²² ONU. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 30 de junio de 2014. Párrafo 25.

²³ "...Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[...]

VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior."

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

drenaje, alcantarillado, calles, parques avenida, seguridad pública, limpieza de calles, entre otros.

En concordancia con lo anterior, el artículo 167, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios dispone lo siguiente:

"Servicios a cargo del ayuntamiento

Artículo 167. Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; [...]"

En el tema que guarda relación con los actos reclamados, también es oportuno enfatizar el margen de acción con el que cuenta la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, el cual deriva de los artículos 10 y 12 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, que establecen:

"Artículo 10. Son atribuciones de la JAPASP, el proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado en su caso, en el medio rural, a través de Comités Rurales, brindando el apoyo y asesoría técnica, financiera, jurídica y administrativa, y coadyuvando y coordinando las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y ejercicio de sus atribuciones conferidas en el presente Reglamento, mismas que son las siguientes:

I. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales y cobrarlos en los términos de la Ley de Ingresos vigente, este Reglamento y demás disposiciones fiscales aplicables;

[...]

VI. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la medición del ciclo hidrológico en cantidad y calidad;

[...]

IX. Supervisar que las descargas de aguas residuales se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente;

X. Fijar los límites máximos permisibles de descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario; [...]

XII. Prestar el servicio de suministro de agua tratada, así como la realización de los estudios tarifarios para el cobro de dichos servicios; [...]"

"Artículo 12. La JAPASP es el Organismo encargado de **operar y garantizar el adecuado funcionamiento de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, así como la captación, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales en el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.**"

A su vez, el Reglamento de Protección y Preservación del Ambiente para el Municipio de San Luis de la Paz, establece que el **Ayuntamiento tiene la obligación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal**, en las materias que no estén expresamente conferidas a la Federación o al Estado, así como de **aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado en los centros de población**, tal como se observa del numeral 6:

"Artículo 6. Corresponde al Ayuntamiento:

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal;

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de protección al ambiente;

III. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en este ordenamiento; así como el de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente conferidas a la Federación o al Estado;

[...]

VI. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y el control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, confinación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos;

[...]

X. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de la prevención y el control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

drenaje y alcantarillado en los centros de población contando, para ello, con la participación que corresponda al Ejecutivo del Estado, conforme a los convenios de coordinación que se celebren;

[...]

XIII. Participar en atenuar situaciones de emergencias y/o contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIV. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas ambientales, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones V, VI, IX y X de este artículo; [...]."

De lo anterior puede concluirse que las autoridades responsables cuentan con la obligación constitucional y legal de garantizar a los ciudadanos la prestación del servicio público de drenaje, tratamiento y disposición de las aguas residuales, el que deberá adaptarse a las disposiciones ambientales que garanticen su adecuado funcionamiento con el fin de evitar problemas sanitarios a la población.

Servicio que, como dejó sentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, se traduce en un principio rector de política pública, conforme con el cual se vincula a los agentes estatales a dirigir esfuerzos presupuestarios que permitan garantizar a la población la operatividad de la red de drenaje de su comunidad, con la finalidad de prevenir, evitar y solucionar la contaminación ambiental generada por las inadecuadas descargas sanitarias.

De ahí que, este tema se encuentra relacionado también con el derecho a una buena administración pública, que constituye un principio de actuación a través del cual las autoridades deben generar acciones y políticas que contribuyan a la solución de los problemas públicos, respetando en todo momento los principios y valores que rigen la función pública.

Se invoca como apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis I.4o.A.14 A (11a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3463, con registro digital 2024340, de rubro y texto siguientes:

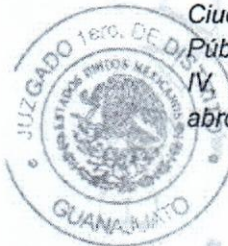
"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PROCEDE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y, POR ENDE, EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE CUANDO SE VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: Una persona presentó reclamación de responsabilidad patrimonial contra la actividad irregular de la Agencia de Gestión Urbana y de una Alcaldía de la Ciudad de México, con motivo del fallecimiento de su cónyuge, quien al conducir una motocicleta en un puente vehicular y derivado de su falta de mantenimiento, al pasar por un "bache", perdió el control e impactó contra los barrotes de contención y salió proyectado por encima del puente. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede la reparación integral del daño y, por ende, el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se viola el derecho fundamental a una buena administración pública, al demostrarse la concurrencia de hechos y condiciones causales entre el daño patrimonial causado y la actividad irregular reclamada. Justificación: Lo anterior, porque la buena administración pública es un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos, el cual se vincula e interrelaciona con otros; con sustento en él deben generarse acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental, para contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. Es así que todo servidor público garantizará, en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y observancia de los principios generales y fines que rigen la función pública, respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad de las personas. En la Ciudad de México está garantizado el derecho referido a través de un gobierno que debe ser abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, conforme a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (suscrita por México los días 18 y 19 de octubre de 2013) y a los artículos 60 de la Constitución Política, 2o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y 36 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, todas de la Ciudad de México. Su conformación jurídica implica una serie de principios y directrices previstos en los artículos 109 y 134 de la Constitución General, correlacionados con otros contenidos en los diversos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; su propósito es generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental para combatir la corrupción y contribuir a la solución de los problemas públicos mediante instrumentos ciudadanos participativos. Todas estas prevenciones implican cambios estructurales en la conformación y en la operación de la administración y son la esencia de la buena administración. En



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

consecuencia, los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, aunado a la actuación ética y responsable de cada servidor público, conforme al precepto 6 indicado, lo que se traduce en obligaciones y deberes específicos y puntuales, determinantes de la obligación de la administración para crear condiciones de regularidad, funcionalidad, eficacia y eficiencia en favor de los ciudadanos. Ahora bien, no acatar tales deberes conlleva la reparación integral del daño a la parte afectada, y en términos del artículo 1o., párrafo último, de la Ley General de Víctimas dicha reparación comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición de las irregularidades que generaron graves riesgos y daños consumados, como la muerte del cónyuge de la quejosa, solicitante de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, quien debe ser compensada económicamente. Lo anterior, porque es obligación de las autoridades demandadas dar un adecuado mantenimiento a las vías de circulación vehicular, de acuerdo con los artículos 15, fracción I, 178, fracción I y 181, párrafo último, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 39, fracción LIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal abrogada, 207 Ter y 207 Quinquies, fracciones III y IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal abrogado".



III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Pues bien, establecido en marco normativo que antecede, es preciso reiterar que la parte quejosa se duele en esta instancia constitucional de la omisión en que han incurrido las autoridades responsables de **poner en marcha y funcionamiento el descargue sanitario del drenaje y conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato**, a fin de prevenir, evitar y solucionar la contaminación ambiental generada por las inadecuadas descargas sanitarias.

Aquí es oportuno señalar que, de las documentales que allegó la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz, cobra relevancia el acta de entrega-recepción de ese municipio, de dos de septiembre de dos mil quince, en la cual se hizo constar la entrega de la documentación que integra el expediente de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y REACTOR + FILTRO PRECOLADOR, 2DA. ETAPA"**, ubicado en la comunidad El Maravillal, correspondiente al programa **"IMPULSO A**

LOS SERVICIOS BÁSICOS DE MI COLONIA Y MI COMUNIDAD", relativo al ejercicio presupuestal del año dos mil catorce, cuyo trabajo tiene como estatus terminado: "Total".

Sin embargo, según lo señala la quejosa, aun cuando la comunidad a la que pertenece cuenta con infraestructura de redes de drenaje, descargas domiciliarias y planta de tratamiento, lo cierto es, que **el sistema de saneamiento se encuentra sin operar**, dado que **no existe un cuerpo receptor como un arroyo o río**, en virtud de que la zona es extremadamente plana, mientras que en las parcelas aledañas, dice, no existe disposición de recibir aguas.

Tal afirmación encuentra sustento en el oficio DGDH/DO/1247/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, signado el **Director General de Desarrollo Hidráulico de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, a través del cual dio respuesta a la petición identificada bajo el folio 61249, en la que se pidió **apoyo para que se concluyera la obra de drenaje en la comunidad El Maravillal (foja 66)**.

Y se indicó que, a fin de dar solución a la problemática referida, **era necesario adquirir un predio para construir una laguna o una zanja de infiltración en donde se depositen las aguas provenientes de la planta de tratamiento, al ser la alternativa más económica que resultó del análisis efectuado que al respecto se anexó a la comunicación.**

Ahora, de una consulta a esa información, se obtiene el documento denominado: **"VISITA TÉCNICA A LA COMUNIDAD DE EL MARAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO"**, en donde se advierten los siguientes datos relevantes:

1. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la delegación de la comunidad El Maravillal solicitó a la



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

Dirección de Obra y Proyectos de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, el apoyo para poner en marcha y en operación la planta de tratamiento de aguas residuales y las redes de drenaje que se construyeron desde hace ocho años (*a la fecha de la visita técnica*).

Motivo por el cual, se realizó una visita a cargo del personal de esa dirección en dicha comunidad, la cual se localiza al Poniente de la cabecera municipal, a una distancia de tres kilómetros, que lo comunica con la carretera 110 del tramo San Luis de la Paz a Dolores Hidalgo (*foja 66 reverso*).

2. Derivado de esa visita técnica, se estableció que la problemática consistía en que la comunidad **contaba con la infraestructura de redes de drenaje, descargas domiciliarias y la planta de tratamiento**; sin embargo, que no existe un cuerpo receptor como un arroyo o río, en virtud de que la zona es en extremo plana y en las parcelas que se pretendía usar para riego agrícola se ha negado a recibir las aguas, lo que impide la operación del sistema (*foja 67 reverso*).

3. De manera que, la Dirección de Obra y Proyectos de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato **presentó dos alternativas de solución**:

3.1. La primera consiste en gestionar algún predio con una superficie mínima de 2,500 metros cuadrados (50m x 50m) ubicado del lado poniente de la planta de tratamiento, adquiriéndolo a través de una compraventa, a fin de que sea factible construir una laguna para depositar el agua tratada como campo de absorción y que se pueda aprovechar para riego de plantas hidrófilas (*carrizo, tule, entre otras*). Esta alternativa **generaría un costo aproximado de un millón ochocientos mil pesos** (*foja 67*).



3.2. La segunda es la construcción de una línea de impulsión por bombeo con tubería desde la planta de tratamiento hasta conducirla a la red de drenaje de la cabecera municipal de San Luis de la Paz, que se ubica en la calle Nogal, de la colonia Luis Gonzaga. Esta opción, por su parte, **tendría aproximadamente un costo de cuatro millones de pesos (foja 68 reverso).**

A fin de brindar mayor ilustración, se reproducen las siguientes imágenes:

**VISITA TÉCNICA A LA COMUNIDAD DE EL MARAVILLAL,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

ANTECEDENTES

La localidad solicita apoyo para poner marcha y en operación la planta de tratamiento de aguas residuales y las redes de drenaje que se construyeron hace ya 8 años.

Actualmente este sistema de saneamiento se encuentra sin operar, esta planta de tratamiento se ubica del lado poniente de la localidad de Maravilla, con las siguientes coordenadas latitud 21.279964°, longitud -100.567107°, donde se ubica la infraestructura del RAFA.

PROBLEMÁTICA:

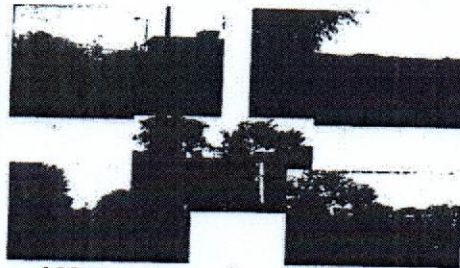
Actualmente la comunidad cuenta con la infraestructura de redes de drenaje, descargas domiciliarias y la planta de tratamiento, sin embargo no existe un cuerpo receptor como arroyo o río, pues la zona es en extremo plana y en las parcelas que se pretendía usar para riego agrícola se han negado a recibir las aguas, por lo que el sistema no puede operar.



**VISITA TÉCNICA A LA COMUNIDAD DE EL MARAVILLAL,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
NÚMERO 1**

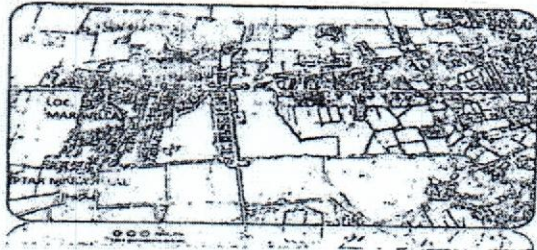
- Gestionar algún predio con una superficie mínima de 2500m² (50mx50m) ubicado del lado poniente de la Planta de Tratamiento, que se tenga certeza jurídica para adquirirlo por medio de una compra venta, que sea factible para construir una laguna para depositar el agua tratada, como campo de absorción y que se pueda aprovechar para riego de plantas hidrófilas (Carrizo, Tule, etc).



**VISITA TÉCNICA A LA COMUNIDAD DE EL MARAVILLAL,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN NÚMERO 2**

- Construir una línea de impulsión por bombeo con tubería, desde la PTAR hasta conducirla a la red de drenaje de la cabecera municipal de San Luis de la Paz, que se ubica en la Calle Nogal (latitud 21.293735°, Longitud -100.536635°) de la colonia Luis Gonzaga, con una longitud de 4.00 km, con un nivel superior de 25 metros aproximadamente





DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

VISITA TÉCNICA A LA COMUNIDAD DE EL MARAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.



• Costos estimados de alternativas:

| ALTERNATIVA 01 | | ALTERNATIVA 02 | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ELEMENTO | COSTO ESTIMADO CON IVA | ELEMENTO | COSTO ESTIMADO CON IVA |
| ADQUISICIÓN DE TERRENO DE 2,500 M2 (50m x 50m) 5200/M2 | 500 mil pesos | LINEA DE IMPULSION DE LA PTAR DE EL MARAVILLAL AL POZO DE VISITA UBICADO EN LA CALLE HOGAL DE LA COLONIA LUIS GONZAGA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 3.6 MDP |
| CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA | 700 mil pesos | EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 400 mil pesos |
| EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 400 mil pesos | TOTAL | 4 MDP |
| COLECTOR DE LA PTAR A LA LAGUNA DE ABSORCIÓN | 200 mil pesos | | |
| TOTAL | 1.8 MDP | | |

GOBIERNO FEDERAL

En virtud de lo anterior, se presentaron ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; y la Presidencia, ambos del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, dos solicitudes de uno, y treinta de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, por las que se pidieron, de manera esencial, la asignación de presupuesto para atender la problemática planteada y/o poner en funcionamiento el sistema de drenaje *—una de dichas peticiones fue presentada por la aquí quejosa—* (fojas 69 a 71).

Lo anterior provocó que esa problemática se introdujera como tema de discusión a la sesión ordinaria del ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, de la que según el acta 07/2023, que aportó la promovente a esta instancia constitucional (fojas 72 a 80), puede observarse, específicamente en el punto 10.5., lo siguiente (se transcribe):

"[...]"

10.5.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA C. MATILDE TEJEDA ARREDONDO, DELEGADA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD EL MARAVILLAL, PARA EXPONER LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD POR EL DEPÓSITO DE AGUAS TRATADAS PROVENIENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

LA REG. L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO DICE QUE, LA COMUNIDAD EL MARAVILLAL SE ENCUENTRA EN UNA CONDICIÓN SANITARIA COMPLICADA, LO QUE ESTA RELACIONADO CON EL TEMA QUE ACABAMOS DE ABORDAR; POR LO QUE, ALGUNOS VECINOS SE

ENCUENTRAN PRESENTES, A FIN DE PLANTEAR LA PROBLEMÁTICA QUE VIVEN Y CONOZCAN LA SITUACIÓN.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA QUE, OTORGO EL USO DE LA VOZ A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD EL MARAVILLAL PARA EXPONER EL TEMA.

LA C. MATILDE TEJEDA ARREDONDO INDICA QUE, AGRADEZCO QUE NOS RECIBAN, LA PETICIÓN ES QUE NOS APOYEN A OBTENER UNA SOLUCIÓN, RESPECTO AL DRENAJE DE LA COMUNIDAD, TENEMOS MUCHO TIEMPO CON EL TEMA Y NO SE LE HA DADO SEGUIMIENTO, HASTA AHORITA NO HEMOS TENIDO RESPUESTA, LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE AGUA TRAE ALGUNOS DOCUMENTOS QUE TIENE DESDE HACE TIEMPO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE, SE LE ATENDIÓ A LA DELEGADA HACE APROXIMADAMENTE UN MES, EL DRENAJE DEL MARAVILLAL SE CONSTRUYE EN LA ÉPOCA DEL C.P. TIMOTEO VILLA RAMÍREZ CON UNA INVERSIÓN CONSIDERABLE, SE CONSTRUYE LA PLANTA, PERO NO SE CONSIDERA EL TERRENO PARA EL RAFA, AL INICIO DE LA PASADA ADMINISTRACIÓN ME CUENTAN LA HISTORIA Y ME DICEN QUE LA DUEÑA DEL TERRENO TIENE QUE DONAR EL ESPACIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RAFA, POR ESO EL DRENAJE DESDE ENTONCES ESTA PUESTO, PERO NO SE PUEDE UTILIZAR, AUNQUE SE TIENE LA PLANTA PARA TRATARLO, PERO NO TIENE DONDE CAER. POR ESO DESDE ESE MOMENTO HASTA HACE ALGUNOS MESES INICIAMOS CON EL PROCESO DE CONVENCER A LA SEÑORA PORQUE NO ESTABA DISPUESTA A DONAR O VENDER, AL FINAL JUNTO CON LA DELEGADA, QUIEN ESTA ENTERADA, LOGRAMOS PODER TENER LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO. SE ENCUENTRA PRESENTE EL LIC. JOSÉ ABRAHAM ÁLVAREZ VALTIERRA, ASESOR JURÍDICO DE LA OFICIALÍA MAYOR, A QUIEN LE CONCEDO EL USO DE LA VOZ PARA QUE AMPLÍE LA EXPLICACIÓN DEL TEMA.

EL LIC. JOSÉ ABRAHAM ÁLVAREZ VALTIERRA SEÑALA QUE, SE INTERVIENE POR PARTE DE SU SERVIDOR, SE ACERCA LA DELEGADA, UN COMITÉ ESCOLAR Y OTRO COMITÉ, SE ACUDE POR PARTE DE JAPASP, DESARROLLO URBANO, ÉSTA ÚLTIMA EMITE LA FACTIBILIDAD DEL SUELO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES VIABLES PARA HACER LAS DESCARGAS Y POR PARTE DE LA JAPASP SE EMITE UN DICTAMEN DONDE REFIEREN QUE ESE ES EL INMUEBLE IDÓNEO, POR PARTE DE DESARROLLO URBANO SE HABÍA BUSCADO OTRA LOCALIZACIÓN, EN CASO DE NO PODER CONCRETAR LA DONACIÓN, INCLUSO SE INVITÓ A LA DELEGADA PARA QUE TUVIESE CONOCIMIENTO DE TODO EL PROCESO. AL DARLE SEGUIMIENTO NOS TOPAMOS CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DUEÑA Y LO QUE ELLOS PIDEN ES ENVIAR A UN INGENIERO PERSONAL PARA QUE DIGA SI HAY PROBLEMA CON LA COMUNIDAD PORQUE SE ENCUENTRAN CERCA SEMBRADÍOS, LA LIC. ELIZABETH YA TRAE EL TEMA DE LA NOTARIA Y ESPERAMOS EL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE ELLOS PARA DARLE CONTINUIDAD, SUPE QUE SE SOLICITÓ POR



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

PARTE DE UN PARTICULAR INTERVENCIÓN A GOBIERNO DEL ESTADO PARA VER EL MONTO PARA CONTAR CON ESE SERVICIO Y PARA ADQUIRIR UN INMUEBLE O FICHA INFORMATIVA, PERO SIN TENER UN ANTECEDENTE PREVIO DE LO QUE YA SE TRABAJÓ. REITERO QUE, LO ÚNICO QUE ESPERAMOS ES EL DICTAMEN TÉCNICO DE ELLOS, SE HA IDO RETARDANDO PORQUE LA SEÑORA ACEPTA Y LUEGO LLEGAN CONDICIONANTES, A LAS REUNIONES ACUDE LA DELEGADA, UN COMITÉ DE LA COMUNIDAD Y UN COMITÉ DE ESCUELA, A TODOS SE LES ESTÁ DANDO LA MISMA INFORMACIÓN.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE, **DESDE HACE UN MES NO HAN CAMBIADO LAS CONDICIONES, EL PROCESO NO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS Y CUANDO ESTE, AUTOMÁTICAMENTE LE PONEMOS EL RECURSO, Y SE HACE EL RAFA**, HEMOS ESTADO ATENDIENDO EL TEMA, EL AVANCE ES CONSIDERABLE A LO QUE HACE DOS AÑOS VIVIMOS, ES CLARO QUE LA PERSONA QUE HACE LA DONACIÓN TIENE CIERTA INCERTIDUMBRE PORQUE PIENSA QUE SERÁN AGUAS NEGRAS Y QUE A LO MEJOR NO PODRÁ UTILIZAR SU TERRENO. **NO TENGO INCONVENIENTE QUE EN CUANTO SE TENGA EL PREDIO SE LE INYECTE EL RECURSO PARA HACER EL PROCEDIMIENTO ADECUADO Y CUALQUIER INFORMACIÓN QUE REQUIERAN. ESTAMOS PARA ATENDERLOS.**

EL REG. ADOLFO VILLEGAS VILLEGAS PREGUNTA QUE SI SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO.

LA REG. L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO PREGUNTA QUE SI ES EL ÚNICO PREDIO QUE SE PUEDE EMPLEAR PARA DESCARGA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA QUE, **SI EXISTE UN PROYECTO Y ESE ES EL ÚNICO TERRENO, FUE UN ERROR DESDE EL INICIO.**

LA REG. L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO ENUNCIA QUE, LA INTENCIÓN ES **VER QUE OTRAS ALTERNATIVAS PODEMOS TOMAR, COMO EL CAMBIO DEL PREDIO.**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE, LA PARTICULAR NO QUIERE VENDER O DONAR EL PREDIO AL MUNICIPIO, PERO **ME SENTARE NUEVAMENTE CON LOS TÉCNICOS Y VEREMOS SI HAY ALGUNA OTRA SOLUCIÓN, PERO DESPUÉS DE CUATRO AÑOS, ES COMPLICADO, ESTE TEMA ES DE VOLUNTAD.** SE ENCUENTRA PRESENTE LA LIC. MA. DEL ROCÍO VÁZQUEZ ORTEGA, ASESOR JURÍDICO, A QUIEN LE CONCEDO EL USO DE LA VOZ PARA QUE AMPLÍE LA INFORMACIÓN.

LA LIC. MA. DEL ROCÍO VÁZQUEZ ORTEGA MENCIONA QUE, EL ASUNTO INICIO MAL, **SON PROYECTOS QUE NO TIENEN UNA PLANEACIÓN ADECUADA,** DESDE EL 2014 CUANDO AÚN VIVÍA EL SR. BENIGNO ZARATE SE FIRMÓ LA DONACIÓN PARA LA PLANTA, PERO NO SE CONSIDERÓ LO DEL RAFA, CUANDO LA CONCLUYEN, **NO SE PUDO PONER EN SERVICIO,** SE HA TRATADO DE BUSCAR NEGOCIACIÓN CON



LA SEÑORA DE DIFERENTES MANERAS, PORQUE EL SR. BENIGNO ZARATE HABÍA FRACCIONADO LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD Y DE ALGUNA MANERA TENÍA OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD, DESAFORTUNADAMENTE FALLECE Y EL TEMA SE DETIENE, PARTIMOS HASTA QUE SE NOMBRA ALBACEA, SE EMPIEZAN A REALIZAR NEGOCIACIONES, PERO ELLA **MANIFIESTA OPOSICIÓN PORQUE TIENE SEMBRADÍOS A UN LADO DE LA PLANTA**, LO ÚNICO QUE ELLOS PIDEN **ES QUE SE GARANTICE QUE NO SUFRIRÁN AFECTACIÓN**, EL MUNICIPIO NO SE HA AVENTURADO A TOMAR DETERMINACIONES COMO DECIR QUE SE EXPROPIA PORQUE PUEDE LLEVAR IMPLÍCITA UNA AFECTACIÓN A TERCERAS PERSONAS Y UNA RESPONSABILIDAD DE DAÑO PATRIMONIAL ES MUY COSTOSA, NO ES UNA SOLUCIÓN QUE ESTE EN ESTA MESA, ES UN ASUNTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, COMO DICE EL ALCALDE ESTA TODOS LOS LUNES O CUALQUIER DÍA Y PUEDEN ACUDIR A RESOLVER SUS DUDAS, **EN ESTE MOMENTO FALTARÍAN DETERMINAR ESTUDIOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR SI EXISTE OTRO PUNTO FACTIBLE PARA HACER ESE TIPO DE DESCARGAS**, CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDE CONAGUA PARA VALIDAR PROYECTOS. CONSIDERO QUE LO MÁS CONVENIENTE ES BAJARLO A LA COMISIÓN.

LA C. MATILDE TEJEDA ARREDONDO INDICA QUE, EN EL AÑO 2017 **HICIMOS UN CONTRATO CON LA JAPASP Y ESTUVIMOS PAGANDO MENSUALMENTE POR UN SERVICIO QUE NO TENÍAMOS, AL TENER UNA PLANTA QUE NO ESTABA FUNCIONANDO**, POSTERIORMENTE TUVIMOS QUE HACER UN ESCRITO PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL PUNTUALIZA QUE, **PUEDO AGENDAR UNA REUNIÓN PARA QUE LOS TÉCNICOS LES DIGAN QUE PUEDE HACERSE**.

LA REG. L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO SEÑALA QUE, LA SITUACIÓN ES DESESPERANTE PARA LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD PORQUE VIENEN LAS LLUVIAS Y **SE TRATA DE UNA SITUACIÓN SANITARIA QUE AFECTA LA SALUD DE TODAS LAS FAMILIAS**, LA INTENCIÓN ES VENIR A BUSCAR QUE SE LES RESUELVAN LA SITUACIÓN, ENTIENDO QUE NO ES LA PRIMERA OCASIÓN QUE SE ACERCAN, ES DE AÑOS, EL HECHO DE QUE SE LES PUEDA ATENDER CADA LUNES SE AGRADECE, PERO ES NECESARIO VER EL ESTADO DE SALUD QUE REQUIEREN, SE TIENE QUE ESCUCHAR A LA GENTE Y VER CÓMO PODEMOS INTERVENIR.

EL C. FRANCISCO ARGUELLES COMENTA QUE, **EN LA COMUNIDAD HAY PERSONAS QUE ESTÁN EMPLEANDO EL DRENAJE Y ESTÁN DESESPERADAS POR NO TENER EL DESCARGUE QUE DEBERÍA TENER**, OJALÁ QUE SE VEA LA MANERA DE EXCAVAR FOSAS.

LA C. MATILDE TEJEDA ARREDONDO DICE QUE, **TODAS LAS CASAS TIENEN FOSAS. PERO HAY GENTE INCONSCIENTE QUE SE CONECTA AL DRENAJE PORQUE PIENSAN QUE YA ESTÁ EN USO, Y SE PUEDE DESBORDAR**.



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL REITERA QUE, SE REQUIERE DE UNA REUNIÓN TÉCNICA, NO DE COMISIÓN Y SI SE REQUIERE DE LIMPIEZA DEL DRENAJE, LO PODEMOS VER CON LA JAPASP PARA QUE SE LLEVE A CABO CUANDO SEA NECESARIO.

EL C. FRANCISCO ARGUELLES ENUNCIA QUE, DESCONOZCO SI CUENTAN O NO CON UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ES EL INICIO PARA LOCALIZAR EL TERRENO, LAS CIUDADANAS PRESENTES VIENEN A PEDIR APOYO PORQUE SE ACERCA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y SE PRESENTARÁ UN PROBLEMA SANITARIO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL REFIERE QUE, EL TEMA PRIMORDIAL ES ATENDER LA PARTE TÉCNICA Y SE ESTÁ ATENDIENDO, NO ES ALGO NUEVO, CONOCEMOS LA SITUACIÓN, NO LOS DEJAREMOS SOLOS. EN ESE SENTIDO, SE INSTRUYE A UNA MESA TÉCNICA ORGANIZADA POR SECRETARÍA PARTICULAR, DONDE DEBERÁN ESTAR PRESENTES LA JAPASP, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OBRA PÚBLICA, SU SERVIDOR Y QUIEN GUSTE DEL AYUNTAMIENTO [...]"-sic-.

[Lo subrayado es propio].

Lo hasta aquí reseñado patentiza la actitud omisa de las autoridades responsables, quienes pese a contar con las atribuciones necesarias para ello -de acuerdo con el marco normativo expuesto anteriormente- y teniendo conocimiento de la situación que impera en la comunidad El Maravillal y las medidas que resultan necesarias para mitigar el daño ambiental que pudiera repercutir en la esfera jurídica de la quejosa, como habitante de la misma, al día de hoy no ha llevado a cabo alguna acción concreta y efectiva dirigida a poner en funcionamiento el descargue sanitario del drenaje y conexión de tubería dentro de la comunidad del Maravillal, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Aclarando en este punto que en nada incide que en el presente asunto no se haya ordenado el desahogo de alguna prueba pericial con la que pudiera evidenciarse fehacientemente la afectación ambiental con motivo de esa omisión, en la medida que tratándose de protección al medio ambiente, basta con que en la vía de derechos humanos se advierta algún riesgo probable de

afectación a determinado entorno natural para que pueda ser objeto de tutela constitucional, atento a los principios de prevención y precaución que operan en la materia.

Se invoca como apoyo, por su relevante contenido, la jurisprudencia 1a./J. 11/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 840, con registro digital 2024374, de rubro y texto siguientes:

"DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. DIFERENCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y DE PRECAUCIÓN.

Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había garantizado, bajo el estándar más alto de protección, su derecho humano a un medio ambiente sano. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dos de los principios rectores del derecho humano al medio ambiente sano son el de prevención y el de precaución, los cuales, si bien están estrechamente relacionados, encuentran diferencias puntuales entre sí.

Justificación: El derecho ambiental se fundamenta en diversos principios que, atendiendo al reciente desarrollo de esta rama del derecho, resultan fundamentales para guiar la actividad jurisdiccional. Uno de ellos es el principio de precaución, conforme al cual, cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. Por otra parte, el principio de prevención establece que los Estados deben usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente, ya sea dentro o fuera del territorio del Estado de origen. En este sentido, es posible distinguir entre el principio de prevención y el de precaución, pues el primero se fundamenta en el conocimiento acerca de que determinada situación es riesgosa para el medio ambiente, mientras que el segundo opera ante la incertidumbre sobre dicho aspecto. Esto es, la diferencia sustancial entre ambos principios es la certeza que se tiene en relación con el riesgo, pues en el caso de la precaución se demanda una actuación estatal ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa, en cambio, conforme al principio de prevención, existe certeza respecto del riesgo".



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

Lo que en el caso se corrobora con las propias manifestaciones que se expusieron en la sesión de ayuntamiento transcrita previamente, de la que se advierte que **una de las regidoras del municipio** indicó que: **"LA COMUNIDAD EL MARAVILLAL SE ENCUENTRA EN UNA CONDICIÓN SANITARIA COMPLICADA"** [...] **"...LA SITUACIÓN ES DESESPERANTE PARA LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD PORQUE VIENEN LAS LLUVIAS Y SE TRATA DE UNA SITUACIÓN SANITARIA QUE AFECTA LA SALUD DE TODAS LAS FAMILIAS, LA INTENCIÓN ES VENIR A BUSCAR QUE SE LES RESUELVA LA SITUACIÓN, ENTIENDO QUE NO ES LA PRIMERA OCASIÓN QUE SE ACERCAN, ES DE AÑOS ..."**.

Mientras que, uno de los habitantes de la comunidad afectada y la aquí quejosa, señalaron, respectivamente lo siguiente:



"...HAY PERSONAS QUE ESTÁN EMPLEANDO EL DRENAJE Y ESTÁN DESESPERADAS POR NO TENER EL DESCARGUE QUE DEBERÍA TENER, OJALÁ QUE SE VEA LA MANERA DE EXCAVAR FOSAS."

(...)

"...TODAS LAS CASAS TIENEN FOSAS, PERO HAY GENTE INCONSCIENTE QUE SE CONECTA AL DRENAJE PORQUE PIENSAN QUE YA ESTÁ EN USO, Y SE PUEDE DESBORDAR".

De tal suerte que, bajo lo ya expuesto se advierte **un riesgo probable de afectación** en la comunidad El Maravillal, de la que es habitante la quejosa, pues aun cuando dicha comunidad cuenta con una **infraestructura de redes de drenaje, descargas domiciliarias y planta de tratamiento**, como quedó reseñado, **la misma resulta inoperante ante la ausencia de un cuerpo receptor de las aguas tratadas**, lo que a su vez genera que pueda ponerse en riesgo a la salud de la población.

Sin que las responsables hubiesen demostrado haber ejercido acciones eficientes que tuvieran por objeto dar una solución a la problemática planteada; sino que, por el contrario, al menos de lo

probado en autos, se advierte que únicamente han realizado reuniones en donde se ha abordado ese tema, pero sin gestionar, se insiste, lo necesario para garantizar efectivamente la operatividad de la red de drenaje de la comunidad en comento.

En el entendido que, no pasa desapercibido el hecho de que en la reunión del ayuntamiento se haya establecido que **se ha estado negociando la adquisición de un predio a fin de que sea destinado para que en el se descarguen las aguas de la red del drenaje**; no obstante, ello, por sí sólo, **no da solución a la problemática de la que se viene hablando**; pues como se expuso anteriormente, esa no es la única alternativa para atender el tema en cuestión (a manera de ejemplo, la Dirección de Obra y Proyectos de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato señaló como una opción la construcción de una línea de impulsión por bombeo con tubería desde la planta de tratamiento hasta conducirla a la red de drenaje de la cabecera municipal de San Luis de la Paz).

Incluso, en la propia sesión del ayuntamiento **se planteó la posibilidad de buscar otras alternativas para atender la problemática de la comunidad**, a lo cual el Presidente municipal responsable indicó que *"debía sentarse"* nuevamente con los técnicos a fin de constatar **si existía alguna otra solución** (a lo que añadió que después de cuatro años era complicado, pues a su parecer, ello era un tema de voluntad); **sin que hasta este momento se tenga noticia de que eso ya hubiese ocurrido.**

Aunado a ello, es oportuno traer a cuenta que de una consulta al incidente de suspensión del que deriva este asunto, el cual se invoca como hecho notorio²⁴, se advierte que en resolución interlocutoria de veintiuno de agosto de este año, se concedió la suspensión definitiva a la promovente, entre otras cosas, para que

²⁴ Se invoca como apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, con registro digital 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)".



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

tuviera verificativo la integración de la mesa técnica propuesta en la sesión de ayuntamiento, en la que se abordarían los aspectos que fueron puestos en conocimiento de la responsable y se buscaran soluciones viables a dicha problemática.

Sin que de dicho cuaderno se desprenda que las autoridades ya hubiesen realizado lo anterior; **lo que patentiza aún más su actuar pasivo frente a un problema que les atañe y sobre el cual, constitucionalmente, tienen la obligación de atender.**

De tal suerte que, si a la presente fecha no se ha demostrado que las autoridades responsables han emprendido acciones efectivas a fin de buscar una solución al tema que se les hizo ver por lo quejosa; entonces, son evidentes las omisiones en que han incurrido, vulnerando de ese modo los derechos humanos cuya tutela solicitó la promovente –*buena administración pública, medio ambiente y salud*–; por lo que, lo procedente será conceder la protección constitucional solicita, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando.

SEXTO. Efectos del amparo. De conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la protección constitucional son para que el Ayuntamiento y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, ambos de San Luis de la Paz, Guanajuato, en el plazo de **VEINTE DÍAS hábiles**, contado a partir de que se les notifique la firmeza de la presente resolución, procedan en los términos siguientes:

a) Otorquen el auxilio para la recepción de las aguas residuales del domicilio de la parte quejosa, como lo es el desazolve de la fosa séptica que en su caso tuviere instalada en su casa, ubicada en la comunidad El Maravillal del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, toda vez que refiere que algunos de los

habitantes de dicha comunidad hacen uso de esa red de drenaje, sin incluirse, lo que hace presumir la existencia de la citada fosa.

Acción que deberán realizar de manera periódica, de acuerdo a la capacidad de la fosa y el uso con la que la misma cuenta, claro está. Es así, pues concluir en sentido contrario, sería secundar una conducta ilegal y contribuir al desacato de la ley; sin que para ello sea factible condicionar la prestación del servicio a pago alguno.

Aclarando en este punto, que este efecto no tiene el alcance de ordenar el desazolve de fosas sépticas que pudieran encontrarse instaladas en viviendas distintas de aquellas correspondientes al domicilio de la quejosa, pues para ello sería necesario que las autoridades responsables contaran con la autorización respectiva de los propietarios o poseedores (bajo un justo título), de los inmuebles respectivos.

No obstante, nada impide a las responsables de mérito, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, bajo su más estricta responsabilidad, realicen las acciones pertinentes, relacionadas con ese tópico.

Asimismo, las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán ejercer un control adecuado sobre la red de drenaje que se encuentra construida en dicha comunidad, a efecto de que no se realice la descarga de aguas residuales en ese sistema, hasta **en tanto se encuentre en operatividad la red de drenaje sanitario, a efecto de evitar que los fluidos salgan al exterior.**

b) Se convoque a la mesa técnica propuesta en la sesión de ayuntamiento de treinta de marzo de dos mil veintitrés; y, en la misma se discuta cuáles son las opciones viables que se tienen al alcance para poder brindar una solución a la problemática existente

Japasp.
Obras.
Desarrollo Urbano.



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

en la comunidad "El Maravillal", relacionada con la condición sanitaria que priva en ese lugar derivado de la inexistencia de un cuerpo receptor en el que se descarguen las aguas de la planta de tratamiento.

En el entendido que, de requerir mayores conocimientos técnicos, las responsables de forma inmediata deberán gestionar y promover los estudios respectivos a fin de que se cuente con la opinión especializada necesaria, para lo cual podrá auxiliarse de diversas dependencias (*como por ejemplo, la Dirección de Obra y Proyectos de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, quien ya presentó dos alternativas para dar solución al problema de mérito*).



c) Hecho lo anterior, **definan e implementen una la solución para atender el problema que hay en la comunidad "El Maravillal"**; es decir, la manera en que deberá ponerse en funcionamiento el descargue sanitario del drenaje, para lo cual, de ser el caso, deberá gestionar los recursos necesarios ante las autoridades competentes e informar lo conducente a este Juzgado, **hasta que se encuentre en operatividad la red de drenaje sanitario, a efecto de evitar que los fluidos salgan al exterior.**

En esos términos y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

ÚNICO. La Justicia de la Unión **ampara y protege** a Matilde Tejeda Arredondo, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y efectos que se destacaron en los dos últimos puntos considerativos de esta sentencia.

Notifíquese.

Así lo sentenció y firma **Luis Alfredo Gómez Canchola**, Juez
Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido
de **Eduardo Molina Pereda**, secretario que autoriza y da fe.

El suscrito secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato,
CERTIFICO Y HAGO CONSTAR que: la presente sentencia, relativa al juicio de amparo **964/2023-III**,
coincide fiel y exactamente, tanto en su versión física, que se glosa al expediente y se firma de manera
autógrafa el día de hoy **treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés**, como en su versión electrónica, la
cual se firmó con la Firma Electrónica (FIREL) en la fecha y hora que arroja la evidencia criptográfica
respectiva, en atención a las cargas de trabajo que tiene este Juzgado. **Doy fe. Eduardo Molina Pereda.**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

JUICIO DE AMPARO 964/2023-III

El once de febrero de dos mil veinticinco, se da cuenta al Juez con el estado de autos .- Conste.

Guanajuato, Guanajuato, once de febrero de dos mil veinticinco.

REQUIERE CUMPLIMIENTO EJECUTORIA

Analizado el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio del año dos mil veinticuatro, se tuvo al **representante legal del Organismo denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato;** informando las gestiones realizada a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, lo cual acreditó con diversa constancia que anexó.

Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público e interés social, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y vistas las constancias que obran en autos y de forma destacada se advierte que giró oficio librado a **María Magdalena González Otero, Síndico Municipal con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato,** donde solicitó convocar a mesa de trabajo, a efecto de que determinara las acciones tendientes a la liberación del bien inmueble sobre el cual se ubica la laguna de oxidación.

En tales condiciones, **requiérase** a las autoridades responsables **Ayuntamiento y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, ambos de San Luis de la**

J. H. S. ARROYO PONCE
Tribunal de Justicia del Poder Judicial de la Federación
15/02/25 14:00:00



[illegible]

Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo indicado sin causa justificada, se les impondrá una multa correspondiente a cien unidades de medida y actualización¹, con apoyo en el artículo 258 de la ley reglamentaria in cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, **que puede concluir con la separación de su cargo y su consignación ante las autoridades correspondientes.**

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la

¹ De conformidad a lo dispuesto en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, en correlación con la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.



ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el



momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo”²

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Luis Alfredo Gómez Canchola**, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido de **J. Jesús Arroyo Ponce**, Secretario que autoriza y da fe.

Paty

J. JESÚS ARROYO PONCE
Notario Público del Poder Judicial de la Federación
Escribo en el día 12 de Noviembre de 2014

² Consultable en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I, página 19, Materia común, registro digital: 2007918.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

SECCIÓN DE AMPARO

JUICIO DE AMPARO 964/2023-III

OFICIO. 4677 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

OFICIO. 4678 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

EN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 964/2023-III, PROMOVIDO POR MATILDE TEJEDA ARREDONDO, CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

Guanajuato, Guanajuato, once de febrero de dos mil veinticinco.

REQUIERE CUMPLIMIENTO EJECUTORIA

Analizado el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio del año dos mil veinticuatro, se tuvo al representante legal del Organismo denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato; informando las gestiones realizada a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, lo cual acreditó con diversa constancia que anexó.

Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público e interés social, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y vistas las constancias que obran en autos y de forma destacada se advierte que giró oficio librado a María Magdalena González Otero, Síndico Municipal con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato, donde solicitó convocar a mesa de trabajo, a efecto de que determinara las acciones tendientes a la liberación del bien inmueble sobre el cual se ubica la laguna de oxidación.

En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables Ayuntamiento y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, ambos de San Luis de la Paz, Guanajuato, para que en el plazo de TRES días, contados a partir de que reciba el oficio que al efecto se gire, informen el resultado de las acciones que realizaron a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo.

APERCIBIMIENTO.

Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo indicado sin causa justificada, se les impondrá una multa correspondiente a cien unidades de medida y actualización³, con apoyo en el artículo 258 de la ley reglamentaria en

³ De conformidad a lo dispuesto en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, en correlación con la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

J. JESÚS ARROYO PONCE
FISCAL DE AMPARO
15/02/25 14:00:00



cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inexecución correspondiente, **que puede concluir con la separación de su cargo y su consignación ante las autoridades correspondientes.**

Como sustento de lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inexecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

100333748_0313000032987784035.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

| FIRMANTE | | | | |
|--|--|-------------|------|-------------|
| Nombre: | J. JESUS ARROYO PONCE | Validez: | BIEN | Vigente |
| FIRMA | | | | |
| No Serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.3f | Revocacion: | Bien | No revocado |
| Fecha (UTC/ CMDX) | 10/02/25 23:57:31 - 10/02/25 17:57:31 | Status: | Bien | Valida |
| Algoritmo: | RSA - SHA256 | | | |
| Cadena de firma: | 0e 37 7b 9b 48 ff 75 d0 64 6a 8a d2 c3 2c 4e 2d 95 25 1c a3 0a 75 57 04 fb 73 7c 61 a5 5e b8 74 e7 f0 ae de 6d ff ed 62 9b 9a 88 16 5b 10 61 12 7b cf 1e 51 b1 ce 26 f3 d2 cc de a9 7a 31 04 59 c2 66 b8 79 80 98 fb ad 15 a1 8a 3d ee b5 de 4c 01 52 fc af 12 f1 34 8d 5d 66 d3 a9 40 88 ed 0d 98 6a 86 5e a7 8c 48 b4 f5 74 2b d1 9b e3 15 2e 31 63 0f 05 bf 5d 92 e6 16 5f 75 c3 12 2b 86 f4 af 06 bd 3c b6 22 64 8b 82 b3 86 d6 46 04 fb 58 da b1 70 47 9c ba 59 55 0f f3 a4 69 c8 a4 c8 62 a6 57 81 2d 2c 66 bc 84 19 f9 27 95 18 32 c4 b5 d9 9f 48 11 05 16 a2 00 db 1a 11 d6 e3 a8 26 b5 ee 94 60 d0 7d 5e d9 49 1d 94 53 b1 d9 7f 6f 4b 23 49 e3 76 94 8a 3e 75 31 a6 c2 d2 65 a6 61 b7 81 ca f7 d6 78 c1 7f a9 c1 f7 2b 05 39 c4 79 c8 9a 4a bd 4b 1f 28 5e 5c 63 13 47 34 ab 52 af 8e | | | |
| OCSP | | | | |
| Fecha: (UTC/ CMDX) | 10/02/25 23:57:32 - 10/02/25 17:57:32 | | | |
| Nombre del respondedor: | Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del respondedor: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Numero de serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.3f | | | |
| TSP | | | | |
| Fecha : (UTC/ CMDX) | 10/02/25 23:57:32 - 10/02/25 17:57:32 | | | |
| Nombre del emisor de la respuesta TSP: | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Emisor del certificado TSP: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| Identificador de la respuesta TSP: | 220037149 | | | |
| Datos estampillados: | Nq1nW7HYAPrYDNa7hTnJMhJt2k= | | | |



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| FIRMANTE | | | |
|--|--|-------------|------------------|
| Nombre: | LUIS ALFREDO GOMEZ CANCHOLA | Validez: | BIEN Vigente |
| FIRMA | | | |
| No Serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.c5.4a | Revocacion: | Bien No revocado |
| Fecha (UTC/ CMDX) | 11/02/25 15:35:30 - 11/02/25 09:35:30 | Status: | Bien Valida |
| Algoritmo: | RSA - SHA256 | | |
| Cadena de firma: | 1a 60 34 ff 0e 5b a4 1c 87 6b 95 ae 9b a8 aa 79 d9 b8 c1 38 10 29 dc a2 94 db 44 38 b0 a8 e8 7b 07 7f 46 a2 7f 58 06 24 54 bd 85 9b 1c 57 6c e2 b9 ed 19 31 8d ac a7 3b 01 7e 42 f7 6a 04 dc 11 de 7a 9e ae 2b 96 c2 c7 61 20 c9 72 25 37 74 bc 4c 3b fe 2c 46 29 0c de 27 ce 57 b7 81 07 f8 d1 7a a9 82 6e 69 ba 13 4b 2b e0 05 61 01 2d c0 d2 95 11 8f 88 9e 9f 10 b0 be 44 f3 06 e2 f8 e2 55 e1 72 59 f7 e0 91 d5 2b fa 58 df c6 4f 9a 95 e0 a5 a3 98 49 6a 12 c5 df 1a f0 fb 11 36 95 64 af 4e c8 f8 66 e8 9b 01 45 16 ad be 50 d8 ca 18 c4 3d 1f 83 ae ec 1d 9a 85 39 84 4f fe 70 b7 5d f7 7d 32 f1 6a 81 20 c1 17 21 92 74 00 80 50 a9 14 ff f4 4c 1c bf d7 b9 f4 c7 34 ef 18 bd b7 8e 0e 55 49 9e 94 0a c0 ec 31 12 7d 3d ec 8d f1 4d 54 b3 af 24 7b a5 f0 36 60 58 6c 38 35 b7 73 78 77 | | |
| OCSP | | | |
| Fecha: (UTC/ CMDX) | 11/02/25 15:35:30 - 11/02/25 09:35:30 | | |
| Nombre del respondedor: | Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal | | |
| Emisor del respondedor: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | |
| Numero de serie: | 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.c5.4a | | |
| TSP | | | |
| Fecha : (UTC/ CMDX) | 11/02/25 15:35:31 - 11/02/25 09:35:31 | | |
| Nombre del emisor de la respuesta TSP: | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal | | |
| Emisor del certificado TSP: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | |
| Identificador de la respuesta TSP: | 220200183 | | |
| Datos estampillados: | tsnSYrZkYCpsaVgHDtXeQCjyrgg= | | |